

Bienes Públicos

Por: Roger Durán

Analista del CNC



Este artículo define la importancia de los llamados bienes públicos en cuanto al desarrollo social y económico de una sociedad así como los desafíos que enfrentan los diversos Gobiernos en cuanto a lograr una adecuada oferta de bienes públicos para satisfacción de las comunidades.

Bienes Públicos se definen como aquellos cuyo consumo por parte de un individuo no impiden que otros se beneficien de los mismos. Ejemplos típicos lo constituyen la seguridad ciudadana o vigilancia policial, sistemas de alcantarillados y alumbrados públicos o inclusive el aire limpio y la educación pública también la información pública.

Son importantes ya que tiene una gran incidencia sobre el bienestar social de un país y sus comunidades. También tienen un significativo peso sobre la distribución de la riqueza y las potencialidades para que esa sociedad transite hacia mayores niveles de desarrollo.

Uno de los dilemas que han de enfrentar las autoridades que proveen Bienes Públicos es el hecho de que siempre va a existir el riesgo de lo que se define como el fenómeno "Free Rider" (fenómeno de polizón) o como decimos en buen panameño "los juega vivos", que consiste en que ciertos individuos quieren aprovecharse de estos activos y no pagar por ellos. En este sentido la responsabilidad del gobierno efectivamente consiste en aplicar la suficiente recolección de impuesto o tasas para asegurarse que no surja esta situación.

Pero quizás el mayor desafío sería la composición de los Bienes Públicos (qué ofrecer y cuánto) y de los impactos que estos tienen. El hecho es que ciertos Bienes Públicos tienden a beneficiar más a algunos segmentos de la sociedad que a otros.

Un sistema de riego público por ejemplo beneficia solamente a algunos productores y no a todo el conjunto, e igual ocurre con la construcción de inversiones públicas en materia de autopistas en vista de que favorecen principalmente a los propietarios de autos y no a los peatones.

Precisamente, dado que se trata de bienes que la sociedad no paga o demanda de forma directa, como ocurre con los bienes privados, surge este dilema sobre qué cantidad proveer y en concepto de qué.

Otro gran dilema es el conflicto de intereses entre gobernantes y gobernados. La literatura económica sostiene que en algunas ocasiones los gobernantes prefieren generar Bienes Públicos que le representan a ellos mayores beneficios políticos, indistintamente a si estos bienes tienen el mayor impacto o no para la población ("Public Choice Theory").

Caso típico de esto son la construcción de infraestructuras físicas lo que casi siempre conlleva un mayor beneficio a corto plazo para los gobernantes que lo que entrañan otros bienes públicos como educación, salud o medio ambiente cuyas ventajas se perciben más a largo plazo y que son críticas como se ha dicho para alcanzar el desarrollo.

Finalmente más allá de estos dilemas es un hecho que la entrega transparente, eficiente y eficaz de bienes públicos constituye un factor fundamental para la sociedad, y uno de los mecanismos para lograr esto de modo efectivo es a través de un proceso continuo de consulta de parte de los gobiernos con los grupos más representativos de la sociedad civil.

Esto puede lograrse mediante instancias de consulta y planificación de la inversión pública que se base en consultas continuas entre las autoridades locales con las comunidades distritales o provinciales por citar ejemplos. Pero aún esas consultas, que ayudan a identificar las demandas deben evaluarse mediante análisis costo/beneficio.

Así un factor de peso sería asegurar el funcionamiento de instancias técnicas que actúen como un tamiz para la selección y formulación de proyectos públicos a efectos de que éstos cumplan con criterios de factibilidad social o económico. Lo fundamental, técnicamente hablando, para escoger prioridades entre cuales bienes públicos proveer es llevar a cabo evaluaciones de beneficios y costos sociales de cada proyecto. Así se asegura el mayor beneficio social posible por cada balboa invertido. O sea, se beneficia a la mayor población posible en forma medible, se estima la rentabilidad social de la inversión. Por ejemplo, el beneficio de una adición a la educación vs. El beneficio causado por una nueva carretera. Hay técnicas para medir con adecuada precisión esas opciones. Por último, naturalmente, se requiere reforzar los mecanismos mediante los cuales los gobernados exigen a los gobernantes transparencia y rendición de cuentas.